

cargo de su precio al gobierno general en el inventario que de la misma casa de moneda le presentaron, y aparece tambien, que en esa parte de la casa se halla el departamento de blanqueamiento y otras oficinas anexas á la amonedacion.

Segundo; que habiendo estado la casa de moneda dicha, á disposicion del gobierno, ha podido un empleado suyo á virtud de sus instrucciones, ocupar la parte del edificio de que se trata, sin que importe esa ocupacion hecha con derecho, violencia alguna al de propiedad que ha pretendido deducir el quejoso, cuyo derecho en caso de disputa, seria objeto de los tribunales comunes, y

Tercero; que en consecuencia, no existe la violacion de garantías que ha reclamado D. Walterio W. Simon. Por las consideraciones espuestas, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: Es de confirmarse y se confirma, la sentencia que en 20 de Diciembre del año próximo pasado pronunció en Guaymas el juez de Distrito de Sonora, declarando: que la justicia de la Union no ampara ni protege á D. Walterio W. Simon, representante de los antiguos empresarios de la casa de moneda de Hermosillo, contra la ocupacion de la parte de dicha casa que bajo el rubro de «parte propia» figura en los inventarios presentados al gobierno, y de la cual ha tomado posesion el nuevo director nombrado por éste, ciudadano Florencio Monteverde.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de Distrito de que proceden, con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el toca.

Asi por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*M. Anza.*—*S. Guz-*

man.—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M^o Aguilar,* secretario.

Son copias que certifico. México, Abril ocho de mil ochocientos setenta y dos.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado 2º de Distrito de México, por Agapito Polo, por creer que hay violacion de garantías en su persona, con el hecho de haber sido destinado al servicio de las armas contra su voluntad.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

C. Juez.

El promotor que suscribe en el juicio de amparo promovido por el joven Agapito Polo, contra el hecho de haber sido tomado de leva por los soldados del cuerpo de caballería número 11, en el estado de esos autos que es el de alegar haciéndolo en la forma que prescribe el art. 13 de la ley de 20 de Enero de 1869, dice: que la justificacion de vd. se ha de servir otorgar el amparo que solicita el quejoso, en razon de haberse violado en su persona, con el hecho material de habérselo tomado de leva y el alistamiento en el cuerpo núm. 11 de caballería con las formalidades que expresa el certificado de filiacion que obra en autos, las garantías otorgadas por el art. 5º de la Constitucion en vista de las razones que someramente pasa á exponer, porque el presente caso es de tal naturaleza, que á juicio del que suscribe, con las consideraciones que tiene expresadas en su pedimento anterior, cree suficiente para que se le conceda el amparo.

No hay necesidad de reproducir en este alegato de una manera minuciosa todas las circunstancias especiales del caso, porque en varios documentos que obran en autos se desprenden y aparecen como en relieve

ciertas particularidades tan graves y tan atentatorias á las garantías que otorga el código fundamental de la República, que bastará para marcar la violación de los preceptos constitucionales señalar cuales son los caracteres mas promovedores para que el ciudadano juez, fijando en ellos su atención, perciba en donde y hasta qué grado se ha vulnerado la ley suprema, cuya protección se solicita por Agapito Polo.

Este manifiesta en su oculto ser menor de edad, y esta circunstancia se encuentra plenamente comprobada, no solo por las deposiciones de los testigos que presentó para justificarla, sino tambien por el mismo certificado de filiación remitido por el jefe del 11 de caballería, en cuyo documento se expresa que el quejoso tiene diez y seis años de edad, de manera que aun cuando se nota la diferencia de un año entre lo expresado por Polo en su oculto y lo que declaran los testigos presentados manifestando que tiene quince años y lo que dice la filiación, tal diferencia es de ninguna importancia en la cuestión presente, porque en todo caso, sea que tenga quince ó diez y seis años, de todas maneras es menor de edad y no gravitando sobre él las obligaciones y cargos que la Constitución impone á los ciudadanos. Estos, según la fracción 2ª del art. 36 de la Constitución, tienen el deber de alistarse en la guardia nacional y disfrutan la prerrogativa de tomar las armas para la defensa de la República y sus instituciones, conforme á la fracción 4ª del art. 35; pero siempre que tengan las calidades que se marcan de una manera precisa en la primera parte del art. 34, que le falten al quejoso. Por consiguiente, si este no tiene las condiciones que exige el código fundamental para alistarse en la fuerza armada, es incapaz legalmente para servir en el cuerpo donde se le ha colocado contra su voluntad.

El que suscribe se abstiene de entrar en todas las consideraciones que con arreglo

al derecho comun se deducen de los privilegios que tanto en el derecho antiguo como en el novísimo consignados en el código civil se conceden á los menores, porque en materia de garantías constitucionales sobre las que se versan los juicios de amparo, todos los raciocinios que puedan hacerse tanto en favor como en contra, deben basarse, á juicio del que suscribe en el texto constitucional y en su espíritu, para deducir la constitucionalidad ó inconstitucionalidad del acto reclamado, sirviendo como de apoyo las disposiciones del derecho comun, para vigorizar los preceptos constitucionales. Así es que en el presente caso, el art. 5º de la Constitución en su primera parte dice: que nadie puede ser obligado á prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento; y la legislación antigua nuestro derecho patrio y aun el mismo código civil consideran al menor de edad inhábil para contraer obligación alguna, (arts. 388 y 399,) sin expreso consentimiento del que ejerce la patria potestad sobre el menor; de manera, que el acto contra el cual se ha solicitado el amparo evidentemente viola el precepto constitucional consignado en el art. 5º ya mencionado.

Mas como esta garantía está en suspenso por la ley de 1º de Diciembre del año próximo pasado, será necesario atender al espíritu de esa ley y ese está netamente marcado en la circular con que el supremo gobierno la ha promulgado, y en aquella se percibe, que ni el legislador ni el ejecutivo de la Union han tenido la mente de que ésta, es decir la ley de suspensión de garantías, se haga extensiva del modo que lo pretende componer el coronel del 11 de caballería en su comunicación de 24 del mes próximo pasado, cuando asegura ser sus subordinados la autoridad competente para hacer el reclutamiento y la calificación de que si las personas tomadas de leva están ó no en las condiciones legales para poder ser obligados á prestar el contingente de sangre que la nación necesita para el res-

tablecimiento del orden y la paz. El que suscribe cree, que en ningún caso, por grave que se le suponga, los individuos de la fuerza armada, ejercen mas funciones que las que les concede la Constitucion, y no tienen autoridad de ninguna especie sobre los ciudadanos, sino solamente sobre sus subordinados; y por lo mismo, no habiendo expedido ninguna disposicion por la cual se hayan concedido á los gefes de los cuerpos las facultades á que se refiere el del número 11 de caballería, el acto de mandar filiar al menor Agapito Polo, constituye una nótoria violacion de las garantías individuales en razon de que la ley que las suspende no es comprensiva mas que á los ciudadanos, que conforme á la seccion 4^a del art. 1^o de la Constitucion están obligados en unos casos y tienen facultad en otros para tomar las armas en defensa de la República y sus instituciones.

Intrepretar la ley de 1^o de Diciembre de la manera que lo hace el coronel del 11 de caballería, importa verdaderamente, no solo la violacion del código fundamental en los artículos de que se ha hecho ya mérito, sino ademas la infraccion palpable de las reglas que se indican en lo que puede muy bien llamarse la parte expositiva de la ley, cuando se manifiesta por el ejecutivo supremo de la República de qué manera desea se use de la suspension de las garantías constitucionales, que en su mento, debe tener efecto en lo que fuere absolutamente preciso é indispensable, entre cuyas condiciones no se encuentra anticipar la edad que la misma Constitucion señala para ejercer los derechos y llenar las obligaciones de los ciudadanos. Si tal hubiera sido el espíritu de la ley, un punto de esa naturaleza, no habria dejado de expresarse de un modo claro y terminante; y cuando el legislador no lo hizo así, es lógico y conforme á los preceptos jurídicos inferir, que no quiso que la suspension de garantías se llevara hasta tal extremo. Por estas consideraciones, la justificacion del C. juez

se servirá fallar de la manera que el infrascripto promotor ha pedido al principio y repite en conclusion.

México, Marzo veinticinco de mil ochocientos setenta y dos.—*Francisco G. Moctezuma.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Abril cinco de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el presente juicio de amparo promovido por Agapito Polo á virtud de reputar violadas en su persona las garantías que otorga la Constitucion en sus artículos 5, 16 y 21 con el hecho de habérsele destinado al servicio del ejército contra su voluntad: Visto el pedimento fiscal y el informe que aunque despues de fenecido el término, rindió el C. gefe del undécimo cuerpo de caballería; las pruebas rendidas y alegato del C. promotor, y

Considerando: que si bien por el decreto de 1^o de Diciembre del año próximo pasado se hallan suspensas entre otras las garantías que otorga el art. 5^o de la Constitucion que es uno de los que el quejoso invoca como violado, hay que advertir que dicha suspension solamente y de una manera expresa se refiere al citado artículo sin hacer novacion ó aclaracion alguna á lo que determina la fraccion 4^a del art. 34 de la misma Constitucion, segun el que, ya vigente la garantía que en aquel se otorga, ó ya en suspenso sin efectos, los menores de diez y ocho años no están sujetos al servicio de las armas, ni aun al de la guardia nacional; y

Considerando: que por parte del quejoso se halla legal y plenamente probado ser menor de diez y ocho años y por consiguiente comprendido en la determinacion de la citada fraccion 4^a del art. 34, por tales consideraciones y de conformidad con el pedimento fiscal debia de declarar y declara-

ro: que la justicia de la Union ampara y protege al quejoso Agapito Polo por violarse en su persona en el caso, con la consignacion al servicio de las armas, las garantías que otorga el art. 59 de la Constitucion federal, segun la fraccion 4ª del artículo 24. Hágase saber, remítase copia al "Diario Oficial" y "Semanario Judicial" para su publicacion y elévense los autos á la Suprema Corte de Justicia previa citacion fiscal para los efectos del artículo 13 de la ley de 20 de Enero de 1889. Lo decretó el C. juez 2º de Distrito. Lic. José M. Canulizo. Doy fé.—José M. Canulizo.—M. de Chavero, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril once de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado 2º de Distrito de esta ciudad por el joven Agapito Polo, contra el acto por el que fué tomado de leva, y filiándole contra su voluntad en el escuadron número 11.

Considerando: que en el expediente aparece que el quejoso es menor de diez y ocho años: que aunque por la ley de 1º de Diciembre del año próximo pasado está suspensa la garantía á que se refiere el art. 59 de la Constitucion federal en la parte que determina que nadie puede ser obligado á prestar servicios personales sin su pleno consentimiento, esa suspension comprende solo en cuanto al servicio militar á los mexicanos que gozan del derecho de ciudadanía, entre los que no puede numerarse al joven Polo segun la fraccion 1ª del art. 24 de la Constitucion federal; y que por lo mismo no puede obligársele á servir en el ejército contra su voluntad invocando al efecto la circunstancia de estar suspensa por la ley citada la garantía referida

que se contiene en el art. 59 de la Constitucion federal; por lo que obligado á aquel servicio se viola esa garantía concedida no solo al ciudadano mexicano sino á todo habitante de la república; se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el día 5 del mes y año presentes por el juzgado 2º de Distrito de esta ciudad en la parte que declara: que la justicia de la Union ampara y protege al quejoso Agapito Polo por violarse en su persona en el caso con la consignacion al servicio de las armas, la garantía que otorga el art. 59 de la Constitucion federal.

Devuélvase sus actuaciones al juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el tomo.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—J. M. Lafragua.—Ignacio Ramirez.—José Arteaga.—M. Auza.—S. Guzman.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis Mº Aguilar, secretario.

Señ copias que certifico. México, Abril quince de mil ochocientos setenta y dos.—Lic. Agustín Peralta, oficial mayor.

CRIMINAL.

Causa seguida en el Juzgado de Distrito del Estado de Jalisco, contra Bruno Medrano y otros, por circulacion de moneda falsa.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL DEL JUZGADO DE DISTRITO.

C. Juez de Distrito.

El que suscribe, llevando la voz fiscal por ministerio de la ley, en la via y forma que mas haya lugar en derecho, expongo: